

VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, INCISO A) Y 26, NUMERAL 6 DEL REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, FORMULA LA CONSEJERA ELECTORAL NORMA IRENE DE LA CRUZ MAGAÑA, EN EL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA INTEGRACIÓN Y PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y OTROS ÓRGANOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, ASÍ COMO LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2023.

Para dar claridad a mi disenso en este acuerdo, formularé mi voto en dos apartados. En el primero, destacaré las consideraciones que no acompañó y, en el segundo, expondré los fundamentos y razones de mi determinación.

1. Consideraciones que sustentan el acuerdo.

Para avalar la permanencia de la integración y presidencia de las comisiones; así como de otros de los órganos auxiliares de este Consejo General y evitar la rotación, la mayoría avala la interpretación dada en el acuerdo a los artículos 42, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 9, numeral 1, del Reglamento Interior y 11, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Comisiones, apoyándose también, en varios criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En el acuerdo se establece que las normas antes señaladas, no prohíben que las personas Consejeras vuelvan a integrar una Comisión de la cual ya formaron parte; ni tampoco obligan a la renovación total de dichos órganos.

Se aduce que la permanencia de las Presidencias de las Comisiones, garantiza la continuidad de sus trabajos, el cumplimiento de sus proyectos y la planeación de las actividades que se tendrán que desplegar el año entrante con motivo de la celebración de dos procesos electorales. Actividades, todas, que requieren total atención de las personas Consejeras, por lo que una nueva rotación en la integración de las Comisiones podría ser un elemento obstaculizador en la toma de decisiones y en el avance de los trabajos hasta ahora desempeñados, incluso para el proceso electoral federal 2023-2024.

Sin embargo, en el acuerdo se reconoce que esta continuidad en la integración de las comisiones es un caso de excepción que surge de la situación extraordinaria que se origina con la finalización del encargo de cuatro personas Consejeras.

Por lo que en el acuerdo se toma la premisa de que dicha decisión cumple la finalidad de la ley; privilegia la organización interna en los trabajos de las Comisiones y garantiza la continuidad de los trabajos aún y cuando cuatro personas Consejeras concluyen sus cargos en abril de 2023, se habrán generado los avances necesarios en los temas propios de cada comisión.

2. Fundamento y razones de mi disenso.

No comparto los motivos y la interpretación dada a los artículos 42, numeral 2 de la LGIPE; 9, numeral 1, del Reglamento Interior y 11, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Comisiones.

De la lectura integral de dichas disposiciones legales, no advierto que se desprenda alguna norma jurídica que faculte a este Consejo General a evitar la rotación de las Comisiones y de su Presidencia, bajo una supuesta situación extraordinaria que surge cuando cuatro personas Consejeras electorales estén próximas a terminar su encargo, y consecuentemente, no podrían terminar los periodos de uno y tres años en los trabajos de las Comisiones; menos aún, cuando la no rotación garantiza la continuidad de los trabajos y proyectos que se vienen realizando.

Por el contrario, de una interpretación sistemática y funcional del conjunto de preceptos jurídicos relativos a los requisitos, designación y funcionamiento de este Consejo General, concluyo que todas las personas que lo integramos y que lo lleguen a integrar, cuentan con la presunción legal y humana de profesionalismo y experiencia en la materia y en el desempeño de las funciones como personas Consejeras Electorales.

Al desempeñar nuestras funciones, lo hacemos con el carácter de autoridad. Esto nos obliga a no hacer distinciones en donde la ley no las hace; menos aún, cuando se pretende actuar bajo supuestos de excepción que las normas no contemplan expresa o implícitamente.

En ese contexto, no comparto el alcance que se pretende dar a la autonomía de este Instituto y su facultad de autoorganización de sus trabajos, al referir que lo ordinario sería que no se perpetúen personas frente a las comisiones, pero que en este caso nos encontramos frente a una situación extraordinaria no prevista en la norma que justifica que no haya rotación en las Presidencias e integración de las Comisiones; lo cual, cumple con la finalidad de la Ley.

Mi disenso se sustenta en la interpretación integradora de los artículos 41, base V, apartado A de la Constitución Federal y 36, párrafo 6 de la LGIPE, mismos que se si se analizan sistemática y funcionalmente, nos permiten concluir que tenemos una obligación de renovar cada tres años la integración de las Comisiones y sus Presidencias, a fin de evitar una conformación estática que evite la pluralidad de ideas y visiones en el desarrollo de los trabajos. Además, dicha rotación tiene como finalidad que todas las personas consejeras nos involucremos en las diferentes atribuciones de la función electoral.

Esa rotación, es acorde con los fines de la renovación escalonada del Consejo General, la cual busca armonizar la experiencia de quienes permanecen en el cargo con la visión fresca de quienes lo asumen por primera vez. El escalonamiento garantiza una continuidad y no afectación de los trabajos institucionales que se realizan en los órganos auxiliares de este órgano de decisión.

En relación con lo anterior, es oportuno precisar que no comparto la forma en cómo se interpretó y aplicó lo sostenido por la Sala Superior en el asunto SUP-RAP-616/2017 y acumulados. Esta determinación jurisdiccional únicamente dilucido el

alcance de la obligación de renovar cada tres años la integración de las comisiones, estableciendo que bastaba con renovar parcialmente su integración para cumplir con los fines de la norma electoral.

Para ilustrar lo anterior, en seguida transcribo la parte que interesa de lo dicho por la Sala Superior:

“...Asimismo, la interpretación sistemática y funcional de dichas normas, tampoco permite arribar a la conclusión sostenida por los partidos actores, ya que si bien es cierto que la obligación de renovación cada tres años tiene la finalidad de evitar una conformación estática de las comisiones, ello se consigue con el cambio de alguno de sus integrantes, sin que sea necesaria la renovación total. Por ende, la finalidad perseguida con la norma se logra con la renovación parcial, tal como aconteció en la especie...”

Sin embargo, en el acuerdo no se siguieron los parámetros establecidos por la Sala Superior, de renovar, al menos parcialmente, la totalidad de las comisiones, puesto que en ninguna de ellas se cambia, al menos, a un integrante. Para dar claridad a lo anterior, a continuación transcribo la parte atinente de la sentencia:

“...En este sentido, el artículo 42.2 se debe interpretar en el sentido de que el Consejo General debe emitir un acuerdo de comisiones cada tres años, en el que por lo menos uno de los Integrantes de cada comisión debe cambiar, con el fin de imprimir dinamismo a la integración de las comisiones, sin que sea necesaria la renovación total del órgano en comento...”

Aunado a ello, considero que la interpretación sistemática y funcional de los artículos 42, numeral 2 de la LGIPE y 11, numeral 1 del Reglamento de Comisiones, prohíben que las personas Consejeras que presiden una Comisión, puedan ser designados de manera consecutiva en la misma Presidencia, al establecer la temporalidad específica de un año para desempeñar dicha función. No existe supuesto alguno en ley que permita ampliar ese período de manera consecutiva; menos aún, bajo el supuesto de que ello es la manera de garantizar la continuidad de los trabajos y verse cumplidos los proyectos planeados.

Situación que incluso ha sido razonada por la Sala Superior, tal y como se muestra a continuación:

“...los mencionados preceptos no prevén alguna restricción en el sentido de que no puedan ser nuevamente designados a las presidencias de las comisiones permanentes, ya que la única limitante es que sea en forma consecutiva, lo cual, en el caso de estudio no aconteció...”

Contrario a lo que se afirma en el acuerdo, el hecho de que en abril de 2023 se tenga que nombrar una nueva integración de las Comisiones, en nada afectaría el trabajo institucional, puesto que en ese caso, las personas que integraremos este Consejo General tendremos que tomar en cuenta la posibilidad de que la rotación permita la continuidad de los trabajos con personas Consejeras que continúen integrando su Comisión o que la puedan presidir, incluyendo en esos espacios a las nuevas Consejerías que, en todo caso, también serán personas dotadas de conocimientos y capacidades que permitirán el adecuado desarrollo del trabajo de esta noble institución.

Del mismo modo, pese a lo que se considera, los trabajos de los próximos procesos electorales de Coahuila y el Estado de México; así como del próximo proceso electoral federal 2023-2024 de ninguna manera se verían afectados, puesto que si bien es cierto que desde ahora ya estamos trabajando en ellos, lo cierto es que el inicio formal del proceso electoral sería varios meses después de que la nueva integración de las comisiones y órganos auxiliares se hubiera realizado; y por ende, las nuevas personas Consejeras tendrán el tiempo suficiente para aclimatarse al ritmo del trabajo de las áreas, puesto que la experiencia en la materia es una presunción legal y humana que adquieren al momento de ser nombradas.

Ello atiende a finalidad que busca tanto la Constitución Federal como la LGIPE, en torno a realizar una renovación escalonada de las personas Consejeras, en donde se garantiza la continuidad de los trabajos con la permanencia de personas con experiencia actual del funcionamiento interno y las nuevas aportaciones que, en su caso, pudieran realizar aquellas personas que se unirán a los trabajos del Consejo General; de ahí que no haya una necesidad de acordar la permanencia de la actual integración de las Comisiones y demás órganos auxiliares.

Consideración que se refuerza si se toma en cuenta que las personas Consejeras que están por concluir su encargo, podrían incorporarse a los trabajos de otra Comisión o asumir otra Presidencia, dado que, trabajarían siete meses en esas Comisiones y, una vez que dejen sus encargos, las nuevas personas que integren este órgano máximo de dirección podrán incorporarse a las vacantes que se abrirían; o bien, tal y como se pretende hacer ahora, se podría realizar un acuerdo para que, excepcionalmente, se modifique el orden de las Comisiones sin que se afecten los trabajos de los procesos electorales locales 2023, mismos que son realizados y supervisados por personas dotadas de profesionalismo y experiencia que este mismo Consejo General nombró en la integración de los órganos máximos de dirección de los institutos electorales locales para realizar dichas tareas.

Cabe mencionar que incluso en las consideraciones del acuerdo se menciona que una vez que se incorporen las nuevas personas Consejeras, el Consejo General podrá proceder a la revisión y modificación de la integración de las Comisiones, por lo que no hay una justificación razonable para que, en este momento, apliquemos un supuesto de excepción que no atiende a un criterio de notoria urgencia, necesidad ni de idoneidad; menos aún, cuando quienes formamos parte de este órgano colegiado, estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la ley.

Por ello, a pesar de que no comparto los razonamientos del acuerdo y que fueron avalados por la mayoría de quienes integramos este máximo órgano de dirección, asumiré la presidencia e integraré aquellas comisiones en las que continuaré con responsabilidad y de manera coordinada con mis colegas con el fin de desempeñar la función para la cual fui designada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Consejera Electoral

Norma Irene de la Cruz Magaña